



CLAEI Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales

Drogas, militarización y la crisis en México: el papel de Obama

Entrevista con Laura Carlsen, directora del Americas Policy Program en México, DF

Por Mike Whitney*
(Adital)

■ ¿Puede explicar lo que es el Plan México y cómo se relaciona con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)?

Laura Carlsen (LC): El Plan México, también llamado Iniciativa Mérida, es un plan trienal de cooperación en la seguridad regional elaborado por el gobierno de Bush y presentado en octubre de 2007. El plan surgió de la extensión del TLCAN a las áreas de seguridad, conocida como ASPAN: Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Originalmente el Plan México debía ser anunciado en el contexto de la cumbre trinacional de la ASPAN pero fue retrasado. Se presenta como una petición del Presidente mexicano Felipe Calderón de ayuda estadounidense a la guerra contra el narcotráfico, pero en realidad fue preparado en Washington como una manera de "extender las fronteras" del perímetro de seguridad de Estados Unidos. Es decir, que México se ocupara de prioridades de seguridad estadounidenses, incluido el control policial de su frontera sur; y permitiera que empresas privadas de seguridad y agentes gubernamentales estadounidenses, participaran en operaciones de inteligencia y seguridad dentro de México.



El Plan México plantea un fondo de mil 400 millones de dólares, sobre todo en financiamiento militar extranjero. Se describe como una propuesta "antinarcotráfico, antiterrorismo y seguridad en la frontera."

-Después de su elección como Presidente, Calderón comenzó a utilizar a los militares en la llamada guerra contra el narcotráfico. Desde entonces ha habido un aumento permanente de los despliegues de tropas y una escalada de la violencia. ¿Cuál es el papel de Washington en esta continua operación de contrainsurgencia?

LC: El gobierno de Obama ha apoyado el plan e incluso ha solicitado y recibido del Congreso, fondos adicionales más allá de lo previsto por el gobierno de Bush. En los tres años desde que Calderón lanzó la guerra contra el narcotráfico, en México, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la violencia relacionada con la droga ha aumentado hasta más de 15 mil asesinatos; y los informes sobre violaciones de derechos humanos se han multiplicado por seis. Más de 45 mil soldados han sido desplegados en calles y comunidades por todo México. Washington reconoce serios problemas en este



CLAEI Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales

modelo de guerra contra el narcotráfico y sin embargo sigue afirmando, de modo absurdo, que el aumento de la violencia en México es una buena señal, pues significa que los cárteles están sintiendo la presión. El plan en sí no contiene ningún parámetro real de lo que los ciudadanos deben esperar como señales de progreso para que pueda seguir financiándose a pesar de su fracaso.

Se solicitó al Departamento de Estado que presentara un informe de derechos humanos para adjudicar un 15% de algunas partes de las asignaciones y finalmente lo hizo el verano pasado. Pero el informe señaló que incluso ante una falta de progreso en los derechos humanos (incluyendo el uso impune de la tortura, la falta de jurisdicción de la justicia civil sobre los militares, los asesinatos de civiles y la corrupción) el simple hecho de presentar el informe constituía un cumplimiento y adjudicó los fondos.

Hasta ahora el esfuerzo no se describe como contrainsurgencia, porque México no tiene un movimiento formal de insurgencia generalizada. Sin embargo, los ataques contra dirigentes opositores de base en los últimos años han generado temores de que los disidentes son y serán un objetivo de la sociedad crecientemente militarizada.

-En su artículo usted dice que la Iniciativa Mérida es la consecuencia directa del marco de seguridad nacional impuesto en las relaciones bilaterales. ¿Significa que el gobierno de Bush estaba utilizando la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo para ocultar sus verdaderos objetivos políticos? Si es así, ¿cuáles son esos objetivos?

L.C.: El gobierno de Bush utilizó el paradigma antiterrorista para extender la presencia de Estados Unidos en áreas estratégicas. En México, la idea era posibilitar lucrativos contratos de defensa e inteligencia mientras se ayudaba al gobierno derechista, que todavía enfrentaba serios problemas de legitimidad debido a acusaciones no esclarecidas de fraude en las elecciones de 2006.

-¿Hay agentes de inteligencia, fuerzas especiales o mercenarios de Estados Unidos en las operaciones de contrainsurgencia en México? ¿Se pide a México que permita que los militares estadounidenses actúen en su territorio conforme a presuntos acuerdos de seguridad y/o comercio?

L.C.: México no permite soldados estadounidenses en su territorio. Sin embargo, hay una presencia creciente de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) y otros agentes de Estados Unidos en el país, así como de compañías privadas de seguridad. No tenemos un buen sistema para rastrear la presencia y actividades de firmas privadas contratadas para propósitos de seguridad y entrenamiento. Es un problema importante.

-¿Qué efecto ha tenido la militarización sobre la expresión política? ¿Cómo ha afectado a las organizaciones de base, sindicatos, y grupos indígenas? ¿Ha habido un aumento de la violencia relacionada con los militares, como violaciones, golpizas, torturas y homicidios?

L.C: Ha habido un aumento de las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas. En algunas regiones, dirigentes disidentes han sido atacados por los



CLAEI **Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales**

militares. Mujeres, gente indígena, migrantes, disidentes y jóvenes son particularmente vulnerables.

-¿Ha visto alguna mejora o algún cambio en la política estadounidense desde la elección de Barack Obama?

L.C: No. El gobierno de Estados Unidos ha dado su pleno apoyo a la fracasada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, hay signos de reforma en la política interior estadounidense, que podrían llegar a afectar la manera como se ven los esfuerzos extranjeros. La retórica de corresponsabilidad no es realmente nada nuevo y los esfuerzos por reducir el tráfico y la demanda de armas no han sido respaldados por nuevas políticas. El enfoque sigue siendo primordialmente militar y violento, sin que haya dinero alguno incluido en la Iniciativa Mérida para aspectos de salud pública, como el tratamiento o la prevención de las adicciones.

(Laura Carlsen, directora del Americas Policy Program en la ciudad de México, es licenciada en teoría social institucional por la Universidad Stanford y tiene una maestría en estudios latinoamericanos, también de Stanford. Reside en México desde 1986).

* Global Research